



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

| | |
|---------------------|--|
| Magistrado Ponente: | OMAR EDGAR BORJA SOTO |
| Medio de Control | Nulidad y restablecimiento del derecho - T |
| Ref. Proceso | 76-111-33-33-002-2018-00281-01 |
| Demandante | DISTRIBUIDORA SURTIVALLE S.A.S. acmvelez@une.net.co juridico@importropi.com |
| Demandado | MUNICIPIO DE RIOFRIO – VALLE DEL CAUCA notificacionjudicial@riofrio-valle.gov.co contactenos@riofrio-valle.gov.co hfcs27@yahoo.com.mx |
| Expediente Virtual | 76111-33-33-002-2018-00281-01 |
| Asunto | Modifica auto que resolvió no decretar pruebas |

AUTO INTERLOCUTORIO No. 370

Decide la Sala de fondo, lo relativo al recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada en contra del auto dictado dentro de la audiencia inicial del 30 de marzo de 2022, a través del cual el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga niega el decreto unas pruebas solicitadas.

I. Antecedentes.

La parte actora instaura medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declara la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales sancionó a la sociedad demandante por no declarar el impuesto de Industria y Comercio para los años gravables 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, al considerar que se encuentran viciados de nulidad por vulneración de las normas en que debía fundarse, y como consecuencia, la entidad demandante no se encuentra obligada a declarar el impuesto de industria y comercio de los años gravables mencionados en el municipio de Riofrío (V.).

II. Auto Apelado

Mediante auto de pruebas decretado el 30 de marzo de 2022 en audiencia inicial, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga **negó la práctica de unos testimonios** que no cumplían con los requisitos previstos por el

artículo 212 del C.G P., el cual establece que en la petición del testimonio se deberá “enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba”, ya que el profesional del derecho solicitante omitió indicar los hechos que se pretenden demostrar y sobre los cuales los testigos tienen pleno conocimiento de causa.

Lo anterior, en razón a que los testigos declararían con la finalidad de oponerse a los hechos de la demanda, pero no señaló sobre qué hecho específico declararía cada testigo, situación que va en contravía con los postulados de la norma en referencia.

Por otro lado, **se niega la prueba** denominada por la entidad demandada como “*prueba trasladada*”, en la cual la parte pasiva solicita que se **oficie al municipio de Vijes** para que remita copia de las Resoluciones Nros. 021 de noviembre de 2009 y 015 del 16 de enero de 2013, por cuanto dicha prueba resulta inconducente, comoquiera que ha sido solicitado como prueba trasladada, pero éste no es el vehículo probatorio adecuado para pedir tales documentos en la medida de que no son verdaderas pruebas que se hayan recaudado así en algún proceso de origen.

EL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión, la parte demandada interpone recurso de apelación contra el auto interlocutorio que decreta las pruebas, manifestando que las pruebas testimoniales denegadas son de suma importancia para este apoderado, tomando en consideración los hechos de la parte demandante; así mismo refiere que en la contestación de la demanda se manifestó para que se requería dicha prueba, atendiendo la calidad de servidores de la secretaría de hacienda que detentan los testigos.

En cuanto a la prueba trasladada solicitada al municipio de Vijes, persiste en su decreto en tanto que se aportó al proceso la copia de la solicitud hecha por ese apoderado a tal municipio para que fuera entregada una copia de dicha prueba, pero a la fecha ello no ha tenido lugar, y habla de la importancia que tiene al proceso.

Consideraciones.

Expuesta la controversia sometida a consideración, sea lo primero indicar que, de conformidad con el artículo 243.7 del CPACA es apelable en primera instancia el auto “que niegue el decreto o la práctica de pruebas”, debiendo concederse el

recurso en el efecto devolutivo¹; a su vez, la competencia de esta Corporación está señalada en el artículo 153 ibídem que dispone que “[L]os tribunales administrativos conocerán en segunda instancia... de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación”.

1.1. De la prueba testimonial.

En cuanto a las pruebas testimoniales, los artículos 212 y 213 del CGP disponen:

“Artículo 212. Petición de la prueba y limitación de testimonios. Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba. El juez podrá limitar la recepción de los testimonios cuando considere suficientemente esclarecidos los hechos materia de esa prueba, mediante auto que no admite recurso.

Artículo 213. Decreto de la prueba. Si la petición reúne los requisitos indicados en el artículo precedente, el juez ordenará que se practique el testimonio en la audiencia correspondiente.”

Sea lo primero advertir que la parte actora no cumplió con los requisitos formales para solicitar la prueba testimonial al especificar el nombre, domicilio, lugar de notificación del testigo y especialmente el objeto de la misma.

Ahora, en cuanto al objeto de la prueba, se encuentra que el operador judicial debe evaluar de cara al **artículo 168 del CGP**, si la prueba es **pertinente, conducente y/o útil**, en caso contrario, rechazará de plano la prueba.

Así las cosas, respecto de la conducencia de la prueba, el tratadista Miguel Enrique Rojas Gómez en el libro *[L]ecciones sobre el derecho procesal*, explica que la actividad probatoria inconducente apunta a comprobar un hecho relevante por medios no idóneos para constatarlo, envolviendo un inexplicable desperdicio de esfuerzos².

Y bajo la misma línea argumentativa, el tratadista Hernán Fabio López Blanco, en el libro *Pruebas, Código General del Proceso*³, al respecto indicó:

“El concepto de inconducencia de la prueba se recoge en la primera parte del art. 168 del CGP que impone, mediante providencia motivada, es decir dando el juez las razones para hacerlo, el rechazo de plano de pruebas

¹ PARÁGRAFO 1. El recurso de apelación contra las sentencias y las providencias listadas en los numerales 1 a 4 de este artículo se concederá en el efecto suspensivo. La apelación de las demás providencias se surtirá en el efecto devolutivo, salvo norma expresa en contrario.

² Lecciones de derecho procesal. Pruebas civiles. Tomo 3. Rojas Gómez, Miguel Enrique. Página 95. ESAJU: Escuela de actualización jurídica.

³ Hernán Fabio López Blanco. *Pruebas. Código General del Proceso*. 2017. Dupré Editores.

“ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles”, de ahí que la conducencia tenga directa relación con la eficacia de la prueba, porque la prueba inconducente será siempre ineficaz (...). Será, entonces, ineficaz la prueba inconducente por no constituir un medio apto para efectos de demostrar ciertos hechos respecto de los que la ley exige unos precisos y medios de prueba.”

Conforme a lo anterior, las pruebas testimoniales solicitadas por la parte demandada resultan inconducentes por cuanto se tornan ineficaces para demostrar la conducta desplegada por el demandado, habida cuenta que los hechos por los cuales se demandó los actos administrativos, tienen que ver con establecer si se encuentran viciados de nulidad por vulneración de las normas en que debían fundarse, causal objetiva que es demostrable bajo prueba documental, razón por la cual han de negarse los testimonios solicitados.

1.2. Problema jurídico y la conducencia de la prueba.

El artículo 164 del Código General del Proceso señala que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, siempre que se relacionen con los supuestos fácticos objeto de controversia.

En términos de la Corte Constitucional, “...las pruebas judiciales son los medios señalados por el legislador para crear en el juzgador la certeza o el convencimiento sobre la verdad de los hechos que son materia de los procesos respectivos, con el fin de que el mismo aplique el ordenamiento positivo a los casos concretos⁴”.

Según se tiene, la parte demandada pretende que se ordene OFICIAR municipio de Vijes para que remita copia de las Resoluciones Nros. 021 de noviembre de 2009 y 015 del 16 de enero de 2013, por cuanto la parte actora manifiesta que pagó el impuesto de industria y comercio en dicho ente municipal, situación que va ligada con el objeto de la litis. De igual forma, la parte demandada manifiesta que solicitó los referidos actos administrativos sin obtener respuesta.

Teniendo en cuenta lo anterior, como la prueba documental solicitada por la parte demandada resulta conducente para demostrar los hechos planteados en la demanda relacionados con los cargos en que se fijó el litigio dentro de este asunto.

⁴ Corte Constitucional. Sentencia C-830 de octubre ocho (8) de dos mil dos (2002). M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería.

Lo anterior, pese a tener razón el A quo en cuanto a que éste no es el vehículo probatorio adecuado para pedir tales documentos, sin embargo, es de advertir que el juez, dentro del proceso debe proveerse de los medios de prueba necesarios para determinar, de acuerdo con las reglas de la sana crítica⁵, si los hechos alegados en la demanda se adecúan o no al sustento fáctico invocado, razón por la cual se revocará en ese sentido de la providencia recurrida y **se ordenará el decreto de la prueba en el sentido de OFICIAR municipio de Vijes** para que remita copia de las Resoluciones Nros. 021 de noviembre de 2009 y 015 del 16 de enero de 2013, por cuanto tal medio de prueba resulta pertinente, conducente y/o útil de conformidad con los postulados del artículo 168 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

RESUELVE:

1. REVOCAR PARCIALMENTE el auto dictado dentro de la audiencia inicial del 30 de marzo de 2022 y, en consecuencia, se ordena OFICIAR municipio de Vijes para que remita copia de las Resoluciones Nros. 021 de noviembre de 2009 y 015 del 16 de enero de 2013, de conformidad con las consideraciones.

2. CONFIRMAR en lo demás, el auto de pruebas dictado dentro de la audiencia inicial del 30 de marzo de 2022, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, de conformidad con lo expuesto.

3. REMITIR el proceso al Juzgado de conocimiento para continuar con el trámite pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente.
OMAR EDGAR BORJA SOTO.
Magistrado

dg

⁵ Artículo 176 del Código General del Proceso C.G.P.